

Nº 1 P. BAJOS 1893.

TRATADO de Extradición.

Tratado de Extradición

con los

Países Bajos

1893

Habiendo juzgado conveniente el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Su Majestad la Reina de los Países Bajos concluir, de conformidad á sus leyes respectivas, una Convención para la extradición de malhechores, han nombrado al efecto sus respectivos plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de la República Argentina:

al Señor Valentín Virasoro, Ministro de Relaciones Exteriores;

Su Majestad la Reina de los Países Bajos, y en su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino:

al Señor Leonardo van Riet,
Cónsul General de los Países Bajos en Buenos Aires;

quienes, despues de comunicarse sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1°

Las Altas Partes Contratantes se comprometen á entregarse recíprocamente, de conformidad á las reglas establecidas en la presente Convencion, los individuos procesados ó condenados con motivo de alguno de los hechos enumerados en el Artículo 2, y que se hallen refugiados en el territorio del otro Estado.

Artículo 2

Los hechos que pueden dar lugar á la extradicion son los siguientes:

1. Homicidio, á no ser que se hubiese cometido en legítima defensa ó por imprudencia;

2 Asesinato ;

3 Parricidio ;

4 Homicidio ó asesinato cometido en un niño ;

5 Envenenamiento ;

6 Aborto voluntario ;

7 Heridas voluntarias, que hayan causado la muerte sin intencion de darla, ó la mutilacion grave y permanente de algun miembro u órgano del cuerpo ;

8 Violacion y demás atentados al pudor, cometidos con violencia ;

9 Atentado, con ó sin violencia, contra el pudor, cometido en niños de uno u otro sexo, menores de catorce años.

10 Bigamia ;

11. Sustraccion, encubrimiento, supresion
ó sustitucion de niños;

12 Sustraccion de menores;

13 Falsificacion ó alteracion de
monedas ó de papel-moneda, intentada con
el designio de emitir ó de hacer emitir esas
monedas ó ese papel-moneda como no fal-
sificados y no alterados; emision ó circu-
lacion de monedas ó de papel-moneda fal-
sificados ó alterados; falsificacion ó altera-
cion de timbres y cuños del Estado, en
cuanto las leyes de los dos países per-
mitan la extradicion con tal motivo;

14 Falsificacion de escritura pú-
blica ó privada, en las letras de cambio,
los papeles de crédito con curso legal, u
otros títulos de comercio y uso á designio

de estos documentos falsificados, en cuanto las leyes de los dos países permitan la extradición con tal motivo ;

15 Falso testimonio, soborno de testigos ó juramento falso en materia civil ó criminal ;

16 Corrupción de funcionarios públicos, en cuanto las leyes de los dos países permitan la extradición con tal motivo ;

17 Peculado ó malversación de caudales públicos, concusión, cometidos por funcionarios ó depositarios públicos ;

18 Incendio voluntario, cuando de él pueda resultar un peligro común para bienes, ó un peligro de muerte para otro ; incendio hecho con el designio de

procurarse á sí mismo ó á tercero un provecho ilegal con perjuicio del asegurador ó del portador legal de un contrato á la gruesa ;

19 - Trabas voluntarias á la circulación de los ferro-carriles, de las que haya resultado el poner en peligro la vida de los pasajeros ;

20 Actos de violencia cometidos en público, por agrupaciones de gente, contra personas ó propiedades ;

21 Robo cometido con violencia á las personas ó á las propiedades ;

22 El hecho ilegal, cometido á designio, de echar á pique un buque, ó de hacer varar, de destruir, de inutilizar para el servicio, ó de deteriorar un

buque cuando de ello pueda resultar peligro para
otro ;

23 Insurreccion é insubordinacion
del equipaje ó pasajeros á bordo de un bu-
que ;

24 Estafa ;

25 Malversacion de caudales, bienes,
documentos y de todas clases de títulos de
propiedad pública ó privada, cometida por
las personas á cuya guarda estuviesen
confiados ; ó sustraccion fraudulenta de
dichos objetos por los que fuesen socios ó
empleados en el establecimiento en que el
hecho se hubiese cometido ;

26 Quiebra fraudulenta .

Quedan comprendidas en las precedentes cali-
ficaciones la tentativa y la complicidad,

cuando éstas sean punibles en virtud de la legislación penal de los países contratantes.

La extradición se acordará por los delitos arriba enumerados, cuando los hechos incriminados fuesen punibles con pena corporal no menor de un año de prisión, como máximo.

Artículo 3º

La extradición no tendrá lugar:

- 1º cuando el individuo reclamado fuese súbdito, de nacimiento ó por naturalización, de la nación requerida;
- 2º por los delitos políticos, ó por hechos conexos con delitos políticos;
- 3º cuando los delitos hubiesen sido cometidos en el territorio de la nación á quien se pida la extradición;

4.- cuando el pedido de extradicion sea motivado por el mismo hecho por el cual el individuo reclamado hubiese sido juzgado y condenado ó absuelto en el país requerido;

5.- cuando la pena ó la accion para perseguir el delito hubiese sido prescrita, con arreglo á las leyes del estado requerido ó del estado requeriente, antes del arresto del individuo reclamado, ó, si el arresto no se hubiese efectuado, antes que aquel hubiese sido citado judicialmente.

Artículo 4.

La extradicion no tendrá lugar mientras el individuo reclamado sea perseguido y juzgado por el mismo hecho en el país al que se pida la extradicion.

Artículo 5º.

Si el individuo reclamado se encontrase procesado ó cumpliendo una condena por otro delito distinto del que haya motivado el pedido de extradición, no será entregado sino después de terminado el juicio definitivo en el país á quien se pida la extradición, y, en caso de condenación, después de cumplida la pena ó después de haber obtenido gracia. Sin embargo, si, según las leyes del país que solicita la extradición, pudiera resultar de esta demora la prescripción del proceso, su extradición será acordada, siempre que no se opusieran á ella consideraciones especiales, y con la obligación de entregar de nuevo la persona, una vez terminado el proceso en ese país.

Artículo 6.

El individuo cuya extradición haya sido

concedida, no podrá ser procesado ni castigado por delitos políticos anteriores á la extradición, ni por hechos que tengan conexión con esos delitos.

No podrá ser juzgado ni castigado en el país al que se le haya concedido la extradición, por cualquiera hecho punible no previsto en la presente Convención, ni entregado á un tercer Estado sin el asenso del país que lo haya entregado.

Estas restricciones no tendrán lugar si el individuo que es objeto de la extradición permaneciese, después de haber cumplido su condena, tres meses en el país donde ha sido juzgado; ó tres meses después del día en que, condonada la pena, hubiese sido puesto en libertad; ni tampoco si fu-

hiese regresado posteriormente al territorio del Estado reclamante. Los individuos condenados por hechos á los que, segun la legislacion del Estado requeriente, es aplicable la pena de muerte, no serán entregados sino á condicion de que dicha pena no les sea aplicada.

Artículo 7º.

En los casos en que, con arreglo á las disposiciones de esta Convencion, la extradicion no deba acordarse, el individuo reclamado será juzgado, si á ello lugar hubiese, por los tribunales del país requerido, y de conformidad á las leyes de dicho país. La sentencia definitiva deberá comunicarse al Gobierno reclamante.

Artículo 8º.

Cuando el hecho que motiva el pedido de extradición hubiese sido cometido en territorio de un tercer Estado, que no haya solicitado la extradición del criminal, ésta no se concederá sino en aquellos casos en que la legislación del país requerido autorice la persecución de las mismas infracciones, cometidas fuera de su territorio.

Artículo 9º.

Cuando el individuo, cuya extradición se pide, conforme a la presente Convención, por una de las Partes Contratantes, fuese igualmente reclamado por otro u otros Gobiernos, por hechos cometidos en sus territorios respectivos, se acordará la extradi-

ción á aquel en cuyo territorio se hubiese cometido el hecho de mayor gravedad, segun las leyes del país requerido, y, en caso de ser ésta igual, al que hubiese presentado el primero la demanda de extradición

Artículo 10.

Si el individuo reclamado no fuese súbdito del país requeriente y lo reclamase también el Gobierno de su propio país por causa del mismo delito, el Gobierno á quien se hubiese hecho la demanda de extradición tendrá la facultad de entregarlo á quien considerase mas conveniente.

Artículo 11.

El pedido de extradición deberá siempre hacerse por la vía diplomática, y, en no ha-

biendo agente diplomático, por el intermedio del funcionario consular de mas categoría del país que la solicite.

Al pedido de extradición deben acompañar:

1.º el original ó copia auténtica ya sea de una orden de acusación, ó de sentencia de envío ante la justicia de represión con orden de prisión, ya sea de esta misma orden ó de cualquiera otro acto que tenga la misma fuerza, ó bien del fallo condenatorio expedido por la autoridad competente, en la forma prescrita en el país que reclama la extradición.

Estos documentos deberán indicar suficientemente el hecho de que se trate, á fin de habilitar al país requerido, para

juizar si aquel constituye, segun su legislacion, un caso previsto por la presente Convencion;

2º la copia de las disposiciones penales aplicables al hecho de que se trate;

3º Todos los datos y antecedentes necesarios para constatar la identidad del individuo reclamado;

4º una traduccion francesa de todos esos actos y disposiciones penales.

Artículo 12.

El extranjero cuya extradicion pueda pedirse por cualquiera de los hechos comprendidos en el Artº 2, podrá ser detenido provisoriamente en la forma prescrita por la legislacion del país requerido, mediante aviso que se transmitirá, por correo ó tele-

grafo, por intermedio del Ministro de Negocios Extranjeros del Estado requeriente y del representante diplomático o consular de ese Estado en el otro país, y emanado de la autoridad competente del país que pida la extradición, á saber:

De parte de la República Argentina, de los jueces de instrucción y de los de sentencia en lo criminal;

De parte de los Países Bajos, de cualquiera oficial de justicia, ó de juez instructor.

Este aviso debe anunciar la existencia y la remesa de una orden de acusación, ó bien de entrega á la justicia represiva con mandato de prisión, ó bien de un mandato de prisión ó de una sentencia condenatoria.

El individuo así detenido será puesto en libertad si en el plazo de dos meses, á contar desde la fecha de su detencion (salvo que ésta deba mantenerse por otro motivo) no se enviase el pedido de extradicion por la via diplomática ó consular en la forma determinada en el Artículo 11.

Artículo 13.

Queda expresamente estipulado que el tránsito, á través del territorio de una de las partes contratantes, de un individuo entregado por tercera potencia á la otra parte y que no sea súbdito del país de tránsito, se acordará mediante la mera exhibicion, por la via diplomática ó consular, de la orden de acusacion, ó de

la entrega á la justicia represiva con mandato de prision, ó bien de mandato de prision, ó de la sentencia condenatoria; siempre que no se trate de delitos políticos ó de hechos conexos con esos delitos, sino de aquellos enumerados en el Artículo 2 de esta Convencion.

Los gastos de tránsito serán por cuenta del Estado requeriente.

Artículo 14.

Los objetos provenientes de un delito, que hubiesen sido tomados en posesion del individuo reclamado, ó que éste hubiese ocultado y que fuesen descubiertos mas tarde; los útiles ó instrumentos de que se hubiese servido para cometer la infraccion, así como todas las otras pruebas materiales,

serán entregados al mismo tiempo que el individuo reclamado, si el Gobierno requeriente así lo solicitase y si la autoridad competente del Estado requerido lo hubiese ordenado.

Resérvanse sin embargo los derechos de terceros á dichos objetos, los que deben serles devueltos sin gasto alguno cuando el proceso haya terminado.

Artículo 15.

Si en la prosecucion de una causa criminal, no política, uno de los dos Gobiernos juzga necesaria la comparecencia de testigos que se hallan en el otro Estado, será enviado al efecto un exhorto, acompañado de una traduccion al frances por la via diplomática ó consular, al Gobierno

del país donde deba tener lugar la audición,
y se le dará curso en el país requerido,
observándose las leyes que sean aplicables
al caso en el país donde deban comparecer
los testigos.

Artículo 16

Si en una causa criminal, no política,
fuese necesaria ó conveniente la compa-
recencia personal de un testigo, el Gobierno
del país donde se encuentre aquel, le invi-
tará á acudir á la citación que se le
haga, y en caso de ascenso, el Gobierno re-
queriente le acordará gastos de viaje y de
permanencia á contar desde el día en
que hubiese salido de su domicilio, con
arreglo á las tarifas vigentes en el país en
que su comparecencia deba tener lugar, á no

ser que el Gobierno requeriente juzgase deber acordar al testigo una indemnización mayor.

Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, quien, citado que fuese para declarar como testigo en uno de los dos países, compareciese voluntariamente ante los tribunales del otro, podrá ser allí perseguida ni detenida por crímenes ó delitos, ni por condenas civiles, criminales, ó correccionales anteriores á su salida del país requerido, ni bajo pretexto de complicidad en los hechos que motiven el proceso en que tenga que figurar como testigo.

Artículo 17.

Los respectivos Gobiernos renuncian, de una y otra parte, á toda reclamación por la restitución de los gastos de manutención,

de trasporte y demás, que pudieran resultar, dentro de los límites de sus respectivos territorios, de la extradición de los procesados ó condenados, así como de aquellos que resulten de la ejecución de exhortos y de la remesa de las pruebas materiales y de documentos.

El individuo que haya de ser entregado será conducido al puerto que designe el agente diplomático ó consular del Gobierno requeriente, á cuyo costo será embarcado.

Artículo 18.

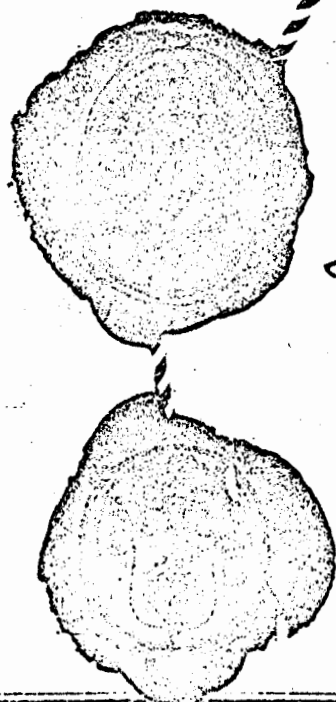
La presente Convención no entrará en vigor sino veinte días después de la promulgación, la que tendrá lugar á la posible brevedad, en la forma prescrita por las legislaciones de los dos países. —

Continuará en vigor hasta seis meses después del día en que fuere denunciada por uno de los dos Gobiernos.

La presente Convención será ratificada y las ratificaciones serán canjeadas en Buenos Aires tan pronto como se pueda.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firmaron y sellaron la presente Convención

Hecho por duplicado en Buenos Aires, el 7 de setiembre de 1893



Valentin Visschers

W. Visschers

11

Departamento de Rel. Exteriores
Buenos Aires, Setbre 7/893

Sométase á la consideracion
del Honorable Congreso

Lamy - Peña

Valentin Virasoro